



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: SERGIO ECHEVERRI VELÁSQUEZ
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 008 2019 00645 01
Sentencia: S-158

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, a favor de la Dra. MARÍA ALEJANDRA VALLEJO ARCILA, quien se identifica con T.P. N° 249.193 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

De otro lado, en atención a la escritura pública 546 del 30 de mayo de 2018 allegada al expediente, se le reconoce personería como apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. a la Dra. GLADYS MARCELA ZULUAGA OCAMPO, T.P. 298.961 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO

ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la AFP PROTECCIÓN S.A., así como el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

SERGIO ECHEVERRI VELÁSQUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del traslado efectuado al RAIS por violación al deber objetivo de información y, en consecuencia, se declare que permaneció afiliado sin solución de continuidad en el Régimen de Prima Media. Adicionalmente, pretende el reconocimiento de la pensión de vejez en los términos de la ley 797 de 2003 de forma retroactiva desde el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluyendo intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas, así como las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 13 de septiembre de 1957; que estuvo vinculado al sector público entre el 16 de junio de 1987 y el 30 de junio de 1995 como inspector de tránsito, lo que equivale a 416.85 semanas contenidas en bono pensional; que se afilió al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 1 de julio de 1995, realizando aportes hasta el 30 de noviembre de 1998, para un total de 126.86 semanas; que a partir

del 1 de noviembre de 1999 se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que ha cotizado un total de 915.14 semanas, para un total en toda su vida laboral de 1458 semanas cotizadas; que al momento del traslado, el fondo privado no le suministró una información completa consistente en el saldo que iba a requerir para acceder a una pensión de vejez, ni la diferencia con respecto al valor de la mesada que correspondería en el Régimen de Prima Media; y que una simulación de su situación pensional realizada por PROTECCIÓN S.A., da cuenta de que en esa entidad accedería a la garantía de pensión mínima, mientras que en COLPENSIONES podría llegar a obtener una pensión de \$1`923.063.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante y su afiliación a esa entidad, aunque aclara que la afiliación se hizo el 10 de septiembre de 1999. Niega los demás hechos de la demanda indicando que los asesores de esa entidad son permanentemente capacitados a fin que puedan suministrar toda la información y asesoría completa y necesaria a sus clientes o potenciales clientes, lo que concretamente ocurrió con el demandante, a quien se le explicaron las consecuencias y efectos del traslado de régimen. Se opuso a las pretensiones ya que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, reconocimiento de restitución mutua a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración y el seguro previsional y falta de juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal.

En el caso de COLPENSIONES, al haber sido presentada de forma extemporánea, mediante auto del 9 de marzo de 2020 se tuvo por no contestada la demanda, fls. 129.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A., a quien le ORDENÓ trasladar a COLPENSIONES la totalidad de valores recibidos con motivo de la afiliación, como cotizaciones completas, con sus frutos e intereses, rendimientos y cuotas completas de administración. ii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas y reactivar la afiliación del demandante al RPMPD, y a reconocer y pagarle la pensión de vejez en los términos de la ley 797 de 2003, aunque condicionando su disfrute a la desafiliación del sistema; iii) ABSOLVIÓ a COLPENSIONES del pago de intereses moratorios; y iv) CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A. fijando como agencias en derecho la suma de \$877.803.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de apelación en cuanto a la orden de trasladar las cuotas de administración y seguro previsional a COLPENSIONES, ya que estos conceptos han cumplido con la finalidad para la cual fueron destinados, esto es, la producción de rendimientos financieros y el cubrimiento de riesgos de invalidez y sobrevivientes. Además, se han equiparado las consecuencias jurídicas de la ineficacia del traslado con la nulidad relativa civil, en ese sentido, se aplicaría el concepto del artículo 1746 del CC que hace referencia a las restituciones mutuas. Teniendo en cuenta que los rendimientos han superado el capital, y como consecuencia de la ineficacia se ordena su traslado, aplicando de manera teleológica el artículo ya mencionado, si se respetan esas mejoras o valores, se deben respetar también la cuota de administración y que no ha generado detrimento patrimonial en cuanto al capital aportado por los actores. Finalmente, solicita que se

analice el fenómeno prescriptivo teniendo en cuenta que las consecuencias accesorias no tocan la consolidación de la pensión de vejez; en igual sentido, en cuanto a los cobros para el seguro previsional, debe tenerse en cuenta que hay un tercero involucrado como es la aseguradora que no fue vinculada y no tuvo como defenderse para evitar que se descontaran estos conceptos.

Se conoce igualmente del asunto por CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión insistiendo en la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador en el artículo 2º de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, a través del cual se estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso en concreto. Agrega que no se puede indicar que exista un vicio en el consentimiento como lo indicó el juzgado de conocimiento que conlleve a la invalidez del acto jurídico de afiliación, ya que para ese entonces solo se exigía a las AFP, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel. En lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben estar a cargo del demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, e imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, sería una carga desproporcionada e imposible de cumplir.

PROTECCIÓN S.A. insistió en la imposibilidad de devolver a COLPENSIONES lo correspondiente a las comisiones de administración debido a que: i) es un descuento autorizado en la ley según el artículo 20 de la ley 100 de 1993; ii) se usa para cubrir los gastos de administración y pagar la prima de seguro previsional; y iii) opera en ambos regímenes, tanto en el RAIS como en el RPM. Agrega que con la condena de primera instancia se estaría constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES, por recibir una comisión que ni siquiera es destinada a financiar la pensión de vejez, más aún cuando conceptos como los seguros previsionales ya fueron cancelados a una aseguradora para que en caso de existir un siniestro de sobrevivencia o invalidez, esta pagara una suma adicional para que financiara las pensiones por dichos conceptos.

Finalmente, la parte actora se pronunció solicitando confirmar la decisión de primera instancia ya que el fondo privado de pensiones, al momento de tramitar el traslado de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, por lo cual, ante la falta de esa asesoría e información, no puede hablarse que el traslado se dio de manera libre y voluntaria. Señala, además, que se encuentra demostrado con las pruebas documentales que reposan en el expediente, que cumple con la edad y las semanas exigidas por el artículo 33 de la ley de 1993, modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 2003, para ser beneficiario de ese derecho pensional en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES con el objeto de salvaguardar

sus intereses, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor SERGIO ECHEVERRI VELÁSQUEZ realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que la AFP queda en la obligación de trasladar. Igualmente, se examinará lo atinente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** SERGIO ECHEVERRI VELÁSQUEZ nació el 13 de septiembre de 1957 (fl. 16); **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 1º de julio de 1995, acumulando en esa entidad un total de 126.86 semanas (fl. 22); **iii)** previamente había estado laborando al servicio de una entidad pública desde el 16 de junio de 1987 hasta el 30 de junio de 1995, lo que representa un total de 416.85 semanas cotizadas, (fl. 19); y **iv)** el 10 de septiembre de 1999 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra afiliado actualmente pero ya en la calidad de cotizante independiente (fl. 17 y 25).

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es la declaratoria de ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual ocurrido en el año 1999 cuando decidió afiliarse a la AFP PROTECCIÓN S.A., alegando que en aquella época no le fue suministrada la información necesaria para adoptar una decisión de esas características. En consecuencia, solicita se declare ineficaz su traslado; se le permita retornar como afiliado a COLPENSIONES; y se le reconozca la pensión de vejez por acreditar más de 62 años de edad y más de 1300 semanas de cotización.

1. Ineficacia de traslado.

Importa recordar que tal y como se ha indicado en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar,

como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a el afiliado, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

2. Cuotas de administración.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar el traslado de la totalidad de aportes recibidos, incluyendo conceptos como las cuotas de administración, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, tema cuestionado en el recurso de apelación de PROTECCIÓN S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el

estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro

individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima" (Resaltado por la Sala)

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

En consecuencia, también en este aspecto de la apelación la sentencia será confirmada, sin que sea procedente declarar prescripción de ninguna clase en tanto no se dan las condiciones para tal consecuencia.

3. Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, el demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido el 13 de septiembre de 1957, significa que los 62 años de edad los cumplió el mismo día y mes del año 2019. De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado por la demandada PROTECCIÓN S.A. a fls. 113, se evidencia que el actor acredita un total de 923.71 semanas cotizadas a esa entidad, que sumadas a las 543.71 que aparecen reportadas a otros regímenes, tanto al ISS como al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, arrojan un total en

toda su vida laboral de 1467.41, que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal.

Ahora, en lo que tiene que ver con la liquidación y disfrute de la prestación, la Sala considera que la decisión adoptada en primera instancia también deberá ser confirmada debido a la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema. Incluso, el fundamento para adoptar esa decisión no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el valor final de la prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que el propio demandante informó en su interrogatorio de parte, que en la actualidad continúa vinculado laboralmente a través de un contrato de prestación de servicios y aportando al sistema, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, una vez reciba los dineros de la cuenta individual que el demandante posee en PROTECCIÓN S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación desde que se acredite el retiro del sistema.

Así las cosas, la sentencia se confirmará en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de septiembre de 2020.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 124
del 16 de julio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Código de verificación: **56a6e132467fc4f88be1bb5f06089b51187e4a93ddcd91019dd56e3666cb21d3**

Documento generado en 15/07/2021 03:35:53 PM